

«Es razonable que haya contenidos mínimos comunes en la Selectividad»

OLGA R. SANMARTÍN MADRID

José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, tiene la mesa de su despacho llena de carpetas con las ocho normativas en marcha para actualizar los campus españoles, entre ellas la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu). En el inicio de la negociación de la tercera ley universitaria en democracia, el número dos de Manuel Castells es consciente de que será «difícil» poner de acuerdo los «intereses antagónicos» de rectores, profesores y estudiantes, pero se muestra dispuesto a hacer cambios para llegar al «máximo consenso».

P.— ¿Qué fortalezas y debilidades tiene el sistema universitario?

R.— Es un sistema resistente y equitativo, pero la falta de financiación ha creado importantes bolsas de precariedad en el profesorado. También se da una cierta debilidad estructural: hay que encontrar una oferta académica lo suficiente amplia pero a la vez controlada para no tener una inflación de títulos.

P.— ¿A qué se refiere?

R.— Tenemos el problema de los *grados blancos*, que luego no tienen competencias profesionales en algunas áreas, como ingeniería. Las universidades son autónomas para ofertar los grados que estimen convenientes, pero no queremos que los estudiantes se den cuenta tarde de que cursan un título que se parece al oficial pero luego no lo es. Hay cierta confusión y tengo comprometida una comisión para estudiarlo.

P.— ¿Por qué han puesto límites a la creación de nuevas universidades? ¿Hay demasiadas?

R.— No hay demasiadas, pero pedimos que el 5% del presupuesto se dedique a investigación. Una universidad no es una academia, y se estaban viendo algunos proyectos *online* que eran academias y querían llamarse universidades. Además, con inversiones irrisorias: había proyectos con un capital inicial de 3.000 euros. Una universidad no es poner un bar o un restaurante, con todo el respeto a la hostelería. Tiene que tener actividad investigadora.

P.— ¿Cree que la Losu llegará a aplicarse? Rectores y sindicatos ponen muchas pegas y los alumnos han empapelado facultades con la cara de Castells. ¿Qué es lo que más les está costando?

R.— Los intereses de los distintos grupos que conforman la comunidad universitaria hay veces que son antagónicos y es difícil llegar a acuerdo. Por eso, estamos reuniéndonos con todos. Hay puntos de fric-

ción en el porcentaje de participación de los estudiantes, que no se reduce en esta ley, y en la forma de elección del rector, bien por la vía del sufragio universal ponderado, como es ahora, bien por un órgano específico donde todos los sectores tienen representación. Si vemos que no es aceptada por una parte importante de la comunidad universitaria, nos lo replantearemos. Acabamos de empezar la negociación y de aquí a que la ley vaya al Consejo de Ministros puede haber cambios. Y luego está el trámite parlamentario: al final son los diputados y senadores los que tienen que aprobarla.

P.— ¿Por qué comenzaron planteando las carreras de tres años y ahora sólo pueden ser de cuatro?

R.— Porque las leyes son documentos vivos, no las tablas del rey Salomón. El Ministerio hace una propuesta y trata de llegar al máximo consenso posible.

P.— Castells dice que la Losu es «la ley más feminista de la historia». ¿No creen que se les puede volver en contra? Por ejemplo, primar los proyectos de género puede hacer que el personal se dedique a estos estudios por encima de todos los demás.

R.— Son medidas de sentido común. Hay una vía para promocionar estos proyectos pero no significa quitar dinero para los otros, sino que es un ámbito de conocimiento más.

«Una universidad no es una academia: debe tener actividad investigadora»

«Los estudiantes tienen que aprobar la beca»

«La carrera no puede costar en Cataluña cuatro veces más que en Galicia»

P.— ¿Cómo se castigaría, con el nuevo régimen sancionador, el macrobotellón de 25.000 jóvenes el pasado viernes en la Complutense?

R.— La Ley de Convivencia no tiene competencias en *macrobotellón*



ANTONIO HEREDIA

nes; son una alteración del orden público. Yo los sufrí cuando era vicerrector de la Complutense y ya no es sólo el aspecto sanitario; limpiar el *botellón* costaba a la universidad casi un millón de euros al año.

P.— Si un alumno copia en los exámenes, ¿mantendrá su beca?

R.— Las becas se dan por necesidades socioeconómicas, pero, si los alumnos copian, suspenden. Tienen que aprobar para mantener la beca. En los decretos de umbrales están claras las horquillas que obligatoriamente deben superar para la beca.

P.— ¿Se plantea mover la horquilla?

R.— No, hay que aprobar.

P.— Castells dice que es elitista con-

denar a un alumno por un suspenso. ¿Usted qué opina de dejar pasar y graduarse sin tener todo aprobado?

R.— Lo que dice mi ministro lo corrobora al 100%. De todas maneras, lo que le ocurre a los estudiantes de Bachillerato no es competencia de este Ministerio.

P.— Pero repercute directamente en la universidad. Los campus están poniendo *cursos cero* porque los alumnos no llegan con suficiente nivel.

R.— Hay universidades que tienen *curso cero* para adecuar lo que piden a la formación que viene o porque les viene bien para su organización. No lo veo un problema grave. Como dicen los expertos del Ministerio de

Educación, cada caso hay que tratarlo individualmente y cada instituto evaluará si un estudiante tiene suficiente capacidad para poder aprobar.

P.— ¿En la universidad el suspenso va a seguir siendo el rasero que mide si un alumno pasa o no de curso?

R.— Por supuesto. Un alumno tiene que aprobar 240 créditos para obtener el grado y esos créditos los tiene que aprobar. Si no aprueba una asignatura, la tendrá que ir repitiendo hasta que la apruebe.

P.— ¿Van a mantener los exámenes de la convocatoria extraordinaria?

R.— Claro.

P.— ¿Es partidario de homogeneizar la Selectividad?

R.— Nos hemos comprometido a trabajar con el Ministerio de Educación y la Crue para ver si hay sesgos entre CCAA, que no está tan claro, y ver cómo mejorar el examen. Es razonable que haya unos contenidos mínimos comunes en los que los coordinadores de las materias en las 17 CCAA puedan ponerse de acuerdo y luego cada autonomía pueda desarrollarlos como lo marcan las competencias. Hay que tener cuidado porque vivimos en un Estado descentralizado.

P.— ¿Se bajó el listón por el Covid en las universidades?

R.— En el año del Covid, como aquello llegó de sopetón, al sufrimiento generalizado no había que añadirle un sufrimiento extra para que aquello no fuera una masacre. Porque si se hubieran puesto extremadamente exigentes... Pero el curso pasado ya todo el mundo tenía claro cómo se hacía la enseñanza *online* y la calidad no se ha visto amenazada.

P.— ¿Es partidario de que la matrícula sea gratuita?

R.— Debemos ir hacia tasas gratuitas, si hay financiación suficiente. No era de recibo que la misma carrera costara en Cataluña o Madrid cuatro veces más que en Galicia y seis veces más que en Francia, donde se puede estudiar Medicina con una matrícula de 500 euros.

P.— En la fachada de este edificio sigue el rúlot de Ministerio de Ciencia y Universidades, aunque ahora son dos. ¿Le hubiera gustado que siguieran juntos?

R.— A mí particularmente sí, yo creo que es el sitio natural. Pero la coordinación entre ambos ministerios es excelente.